

Acceso a fichero con datos de representantes de entidades religiosas. Informe 486/2005

La consulta plantea si, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la creación de un fichero, en el que figuran los datos personales de los representantes legales de las diferentes entidades religiosas que se inscriben en el Registro de Entidades Religiosas, se encontraría dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica, constituyendo una base de datos de carácter personal.

En el supuesto de que así fuere, la Dirección General consultante plantea, asimismo, qué grado de protección deberá implantarse sobre los datos contenidos en dicho fichero, así como si el mismo es susceptible o no del ejercicio del derecho de acceso a los datos en él contenidos en atención a lo dispuesto por el artículo 7.1 de la citada Ley Orgánica.

I

Como cuestión previa, debe recordarse que el artículo 2.1, párrafo primero de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo datos de carácter personal, conforme al artículo 3 a) “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

En consecuencia, las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 resultarán plenamente aplicables a la información de tipo personal relativa a las personas físicas que presten sus servicios en el ámbito de la actividad propia de las entidades inscritas por la Dirección General consultante, y que entran en contacto con la misma como “personas de contacto”, representantes legales o cualquier otra fórmula admisible en derecho.

De acuerdo con el contenido de la consulta, el fichero de cuya creación se trata contiene, junto a los datos referentes a las entidades inscritas, el nombre de la persona de contacto de cada una de ellas, por lo que, a nuestro juicio, se encuentra plenamente sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Según expone en su escrito el Órgano consultante, la normativa reguladora de la organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas no prevé el carácter obligatorio de la aportación de los datos referidos a representantes legales y/o personas de contacto de las entidades inscritas.

En consecuencia, debe recordarse que para que el tratamiento de los datos realizado por el Órgano consultante resulte conforme a la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será necesario que los interesados a los que los datos se refieren (esto es, las personas de contacto de la nueva base de datos), presten su consentimiento al tratamiento, dado que así lo impone taxativamente el artículo 6.1 de la Ley Orgánica. Dicho consentimiento deberá ser, tal y como prevé el artículo 3 i) de la propia Ley, libre, inequívoco, específico e informado, con indicación al afectado de la totalidad de los extremos a los que se extiende el deber de información, consagrado por el artículo 5.1 de la Ley.

II

En cuanto al nivel de las medidas de seguridad que deban implantarse en relación con los ficheros relativos a las personas de contacto y/o representantes del Órgano consultante, con independencia del número de datos que, en concreto, sean recabados por dicho Órgano (así, por ejemplo, referidos a su nombre, apellidos, teléfono y/o dirección de contacto, cargo dentro de la entidad registrada), debe significarse que de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, se extraen las siguientes conclusiones:

1.- Dichos niveles se establecen atendiendo a la naturaleza de la información tratada, en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.

De ello se deduce que, con carácter general, cuando la información personal tratada se refiera únicamente al nombre, apellidos y cargo de las personas de contacto de la consultante, no figurando otros datos de carácter personal correspondientes a dichas personas físicas, resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 4.1 del referido Reglamento, cuando establece que “Todos los ficheros que contengan datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas como de nivel básico”.

2.- Sin embargo, en el presente supuesto, dado que la información incorporada al fichero aparecerá vinculada a una determinada Entidad religiosa, y siendo que, en todo caso, la persona de contacto aparecerá relacionada con dicha Entidad, resultará de aplicación lo establecido por el artículo 4.3 del mencionado Reglamento, cuando dispone que “Los ficheros que contengan datos de ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, así como los que contengan datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas deberán reunir, además de las medidas de nivel básico y medio, las calificadas como de nivel alto”.

III

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que dicho fichero (de personas de contacto) sea susceptible o no del ejercicio del derecho de acceso a los datos en él contenidos en atención a lo dispuesto por el artículo 7.1 de la citada Ley Orgánica, deberá estarse a lo dispuesto por dicho precepto y por el párrafo 2 del propio artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, así como a lo previsto por el artículo 11.1 de la misma, cuando disponen que:

7.1 “De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo”.

7.2 “Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias”.

11.1 “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

En resumen, de acuerdo con los preceptos transcritos, será necesario que la Dirección General consultante recabe el consentimiento de las personas afectadas si pretende proceder a la cesión de sus datos, máxime cuando no se prevé la obligatoria aportación de los mismos de acuerdo con la normativa reguladora de la organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas.

En atención a lo anterior, y a lo previsto por el artículo 12.3 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, cuando establece que, “El responsable del fichero resolverá sobre la petición de acceso en el plazo máximo de un mes, a contar de la recepción de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos de la interposición de la reclamación prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica (...)”, salvo que la consultante haya obtenido el consentimiento expreso por parte del afectado, deberá proceder a fundamentar negativamente cualquier solicitud en relación con el derecho de acceso por parte de terceros a la información de carácter personal obrante en su fichero de “personas de contacto” y/o representantes legales de las Entidades registradas.